

Contingencia

Los tenedores y usuarios de vehículos se ven en el caso de no utilizarlos este fin de semana, lo que sería un problema de poca monta si el gobierno de la ciudad hubiera dotado a los capitalinos de una red de transporte público extensa y eficaz, que desde tiempo atrás resolviera las necesidades del traslado de las personas y de las cosas en la vasta extensión del Distrito Federal.

LA MITAD DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN en el valle de México no han podido salir a transitar el sábado, y la otra mitad no puede hacerlo hoy domingo. La urgencia de evitar un desastre ambiental obliga a esta medida extrema, motivada por el incremento de materiales contaminantes en el aire. Como aun el lenguaje se ha adulterado en los años recientes, a esta circunstancia de peligro grave se le llama contingencia, cuando antaño esta expresión denominaba el carácter temporal, prescindible de la condición humana, algo que podía ser o no ser. Pero hoy lo contingente es lo riesgoso, lo que puede poner en peligro no sólo la salud sino aun la vida. Y como a esa orilla hemos llegado, ha sido preciso ahondar en las previsiones destinadas a disminuir, a hacer menos gravosas, las aportaciones mecánicas a la siedad del aire.

La decisión adoptada por las autoridades en esta materia es como una metáfora de lo que el gobierno se ve impelido a hacer en el resto de los asuntos que son de su competencia (o de su incompetencia, como es mejor decirlo). En efecto, se ha tenido que llegar a esta situación externa ante el fracaso de toda política estructural y de largo plazo destinada a mejorar la calidad del ambiente. Se dirá que especialmente en este caso es injusto cargar sobre las autoridades la responsabilidad plena de lo que es imputable en realidad a los empresarios y a los particulares en general. Pero eso es sólo parcialmente verdadero, pues las omisiones de los ciudadanos comunes y corrientes podrían haber sido paliadas, o impedidas, si el gobierno cumpliera sus atribuciones. Y a fe que, al revés, no ha trabajado más que en razón de lo inmediato, y a menudo en defensa y promoción de intereses que no son los de la colectividad.

Los tenedores y usuarios de vehículos se ven en el caso de no utilizarlos en este fin de semana, lo que sería un problema de poca monta si el gobierno de la ciudad hubiera dotado a los capitalinos de una red de transporte público extensa y eficaz, que desde tiempo atrás resolviera las necesidades del traslado de las personas y de las cosas en la vasta extensión del Distrito Federal. Pero el gobierno de la ciudad no sólo suspendió la construcción del Metro, en el régimen de Echeverría para apoyar al pulpo camionero, cuyo abogado, Octavio Senties, se había convertido a la sazón en el regente de la ciudad, sino que sucesores suyos, como Ramón Aguirre y Manuel Camacho destruyeron los mecanismos del transporte colectivo dando espacio a un monstruo de mil cabezas, que eso y no otra cosa es el amontonamiento de rutas servidas por microbuses y combis. Confiar a ese tipo de vehículos, y a la regulación correspondiente (o a la falta de regulación por decirlo de modo más exacto) la solución al ingente problema del transporte de millones de capitalinos, no sólo fue ineficaz, sino que abrió la puerta a grandes negocios como los del grupo Havre, síntesis del aprovechamiento abusivo de necesidades colectivas. Antes del 8 de abril pasado, se hubiera pensado en que no había peor modo de encarar ese problema, hasta que sobrevino la quiebra de Ruta 100, con toda la secuela de violaciones legales y aun efusión de sangre que la ha acompañado. Lo que hoy ocurre en la ciudad de México no puede desvincularse de lo que ha habido en ella durante todos los trece meses anteriores: una suma de incuria e irresponsabilidad que no es el regente Oscar Espinosa Villarreal quien paga, sino los habitantes de la ciudad que no pueden hoy moverse, o que lo hacen en condiciones pesadas, como en el resto de la semana.

Si se razona que mal de muchos es consuelo de tontos, los habitantes del Distrito Federal pueden contentarse pensando que padecer autoridades incompetentes no es privilegio suyo, sino que es circunstancia extendida a todo el país, porque en toda su amplitud rige todavía el sistema político en que las acciones gubernamentales ineficaces o punibles no son objetadas y mucho menos impedidas por la acción ciudadana. Y eso es posible por la vigencia del Partido Revolucionario Institucional, nacido hace cincuenta años como prolongación del partido de Estado que se llamó antes Nacional Revolucionario y de la Revolución Mexicana después. Cincuenta años después de nacido, y a pesar de la magra cosecha de que, en función del bien social, puede hoy enorgullecerse esa organización, el presidente de la República utilizó el festejo correspondiente para celebrar su militancia, que al menos es discutible.

Aunque su ficha oficial lo hace miembro del PRI desde 1971, sería difícil seguir el tenue rastro de la pertenencia partidaria de Ernesto Zedillo. El obstáculo surge no sólo de la carencia de memoria priísta, de la falta de registro de sus miembros y de su historial, sino también de la ausencia misma de militancia. Como ocurrió a la mayor parte de los futu-

ros tecnócratas que en los setenta se prepararon para el asalto al poder, Zedillo sabía que la línea de ascenso administrativo, que era la que tenía en mente, no lo obligaba a pasar por el partido gubernamental, ya mal oliente para narices delicadas como las de los expertos en finanzas de Hacienda y el Banco de México. Puede por lo menos asegurarse que el priísmo de Zedillo fue virtual, nacido de las inercias, no de la convicción. Por eso, no fue extraño que aun antes de asumir el Poder Ejecutivo, el Presidente electo trazara una estricta línea de demarcación entre el gobierno y el partido. Como no le debía nada, en rigor, al PRI, sino sólo a la preferencia presidencial, que puso a su servicio la maquinaria priísta, Zedillo pudo prescribir que hubiera entre el gobierno y el partido una sana distancia.

Lo que hoy ocurre en la ciudad de México no puede desvincularse de lo que ha habido en ella durante los trece meses anteriores: una suma de irresponsabilidad que no es el regente Oscar Espinosa Villarreal quien paga, sino los habitantes de la ciudad.

Sin embargo, a trece meses y medio de su estancia en Los Pinos, lo que no equivale a su toma del gobierno, el presidente Zedillo ha tenido que revisar su posición. Con su presencia y su discurso en el cincuentenario del PRI, ese partido y el Presidente se han recuperado recíprocamente. Lo hicieron a deshoras, cuando es menos pertinente hacerlo. Zedillo se ufana de su militancia precisamente cuando casi todo en el mundo se avergüenza de ella, y el PRI se enorgullece de que el Ejecutivo sea su líder justamente cuando era más clara la necesidad de prescindir de una dirección asociada a un Estado que sólo o principalmente, ha ocasionado perjuicios a sus gobernados.

Al mismo tiempo que refrendó un priísmo que no ha podido ser documentado ni por sus hagiógrafos (véase, por ejemplo, el apunte referido a Zedillo escrito por Javier Lozada con motivo de la sucesión presidencial, en 1993), Zedillo formuló un par de pronósticos de muy dudosa confirmación. Al menos uno de ellos, el que concierne al crecimiento económico, está sujeto a condiciones que no dependen sólo de la voluntad gubernamental, y por lo tanto es irresponsable augurarlos como promesa por cumplir. El Presidente, al hablar ante sus presuntos correligionarios (buena parte de los cuales han objetado la doctrina económica a que ostensiblemente se afilia el Presidente, el neoliberalismo) simplificó el problema electoral de la agrupación que encabeza (pues acortado el tramo entre el gobierno y el partido, Zedillo sigue siendo líder de uno y de otro), haciendo suponer que los quebrantos priístas en las urnas resultan sólo de la mala situación económica, y que resuelta ésta tales padecimientos quedarán automáticamente suprimidos.

Aunque su ficha oficial lo hace miembro del PRI desde 1971, sería difícil seguir el rastro de la pertenencia partidaria de Ernesto Zedillo. El obstáculo surge no sólo de la carencia de memoria priísta, sino también de la ausencia misma de militancia.

Ni es la crisis la única causa de las reticencias ciudadanas crecientes ante el partido gubernamental, ni ésta será superada en términos tales que la nueva Arcadia que se instaure con las acciones gubernamentales fomentará el clima para una restauración del partido oficial. En 1991, cuando mejoró notablemente la suerte electoral del PRI respecto de tres años antes, no había repuntado la economía después de los desastrosos años del delamadridismo, como para sustentar en tal recuperación la del PRI en las elecciones intermedias del salinismo. Si los resultados comiciales parecieron desmentir las señales de grave descontento ciudadano ofrecidas por el proceso electoral de 1988, ello se debió a una exitosa gestión propagandística, a una inflación retórica y no a los efectos reales de un programa económico que siempre se sustentó en bases falsas o por lo menos carentes de solidez. En 1994, las cifras electorales tampoco estuvieron estrechamen-

te asociadas a los resultados económicos, pues a pesar de la propaganda ya había cundido la certidumbre de que la economía real estaba afectada por graves quebrantos, pero el temor a una desestabilización como la anunciada por conflictos armados o simplemente sangrientos hizo recular a los ciudadanos que se aprestaban a avanzar en el camino de la verdadera contienda partidaria, requisito inexcusable de la democracia.

Pero, si bien se equivoca en el diagnóstico que relaciona economía con votos, es mayor aún el error presidencial al suponer que habrá una mejoría en las condiciones materiales de los mexicanos en los meses próximos. Por lo menos, no hay posibilidad de que los ciudadanos comunes confiemos en la exactitud o veracidad de las previsiones gubernamentales. Si los economistas oficiales fueran tiradores con pistola o arco, difícilmente darían en la diana, pues su miopía o su dogmatismo los conducen invariablemente al desacierto. Las más optimistas visiones del futuro inmediato no pueden evitar considerar que los estragos del programa neoliberal no han terminado de causar sus destrozos, el desmantelamiento de la planta industrial en los años recientes, y el colosal incremento del desempleo en 1995 no son datos simplemente correspondientes al pasado. Surtieron efectos en el conjunto de la economía, y los producirán aún más gravosamente en los meses próximos. Quienes perdieron sus puestos de trabajo en los meses pasados, no ingresaron de súbito al ejército de los que no consumen, porque sus ahorros o los apoyos familiares o el crédito aplazaron ese efecto pernicioso. Pero en este año, los que no recuperen su empleo, y es obvio que muy pocos podrán hacerlo, carecerán de aquellos factores mitigantes de su infortunio, y se marginarán por completo de la cadena económica, lo que equivale a un achicamiento aún mayor del mercado. Anuncian ese triste resultado una variedad de indicadores, no necesariamente los de la macroeconomía, sino los que miden el verdadero estado de la cuestión social.

Uno de ellos es el crecimiento del número de personas que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos en pos de una mejor situación económica. Quienes se aventuran más allá de la frontera no son tontos. Más todavía, puede presumirse en ellos un equipaje de inteligencia o de carácter que precisamente los empuja a buscar oportunidades más anchas de las que están a su alcance en su entorno inmediato. Puede presumirse, por tanto, que no es la ilusión de alcanzar El Dorado lo que los lleva a internarse en territorio norteamericano, pues de seguro no les son ajenas las noticias sobre el maltrato, la explotación y la discriminación que padecen los indocumentados en esas tierras. Y si no obstante ese conocimiento, persisten en su propósito de emigrar, esa actitud, y el número de quienes la asumen, nos ofrecen una idea clara del verdadero talante de la economía mexicana.

Tal incremento real, y el previsible en los próximos meses, ha conducido al gobierno de Estados Unidos a rigorizar sus controles sobre el cruce fronterizo. Sin duda, el que este sea un año electoral en aquel lado de la frontera, y de que el tema de los indocumentados mexicanos, y el de México en general, sea parte de la agenda política norteamericana, agrava una situación que, sin embargo, tiene perfiles preocupantes de por sí. El gobierno mexicano debe proteger a los migrantes nacidos aquí que se adentran en suelo ajeno, y debe protestar por la instauración de medidas que, si bien corresponden a un ejercicio soberano de la autoridad, no pueden soslayar sus efectos en México. Pero harían mejor si, por un lado, propician las condiciones que eviten el éxodo de los mexicanos al exterior y, por otra parte, no se empeñan en mantener la falsa imagen de una idílica buena vecindad, prédica que ignora las verdaderas dificultades de la convivencia de dos países disímiles y enfrentados por una diversidad de factores históricos y sociales.

Esa diferencia, en el campo de la administración de justicia, ha llevado a conjeturas encontradas respecto de la expulsión de Juan García Abrego, el magnate del comercio de estupefacientes.

Los creyentes en que la justicia norteamericana es impoluta, experimentan satisfacción porque allá y no acá se llevará a cabo el proceso contra el capitán mafioso. Pero allá o acá, no es necesariamente cierto que ese delincuente tenga en su contra a las leyes y a los encargados de hacerlas cumplir. Dispone, preso o libre, de un poder que quizá le permitió atentar en Monterrey contra la vida del abogado Leopoldo del Real. Nadie ha derramado una lágrima por la suerte de ese litigante *sui generis*, pero ello no obsta para que se aprecie en su ejecución acaso una muestra del poder del narcotráfico, a pesar de que uno de sus cabecillas principales esté ahora en prisión.

Del Real se hizo notorio desde la universalidad, porque supo que la violencia arbitraria, cuando está asociada al poder, es un instrumento que puede rendir inapreciables resultados. Ya abogado, fue construyéndose a ciencia y paciencia de las autoridades, y a menudo a su servicio, una leyenda de atrocidades. Ya aparecía ostentándose como seductor de sus clientas en casos de divorcio, ya desorejaba adversarios, ya los tundía con sus propias manos o con las de matarifes alquilados. Su asesinato, frente a un honorable jefe policiaco, tiene por ejecutado mensaje inequívoco. Si se le ha ejecutado porque faltó a un compromiso entre narcotraficantes o peor aún, porque traicionó a uno de sus próceres, esa muerte, en ese escenario, con ese testigo, es un desafío que el gobierno hará mal en ignorar.